

pago de trofeos para premiación del equipo de Baseball de Pequeñas Ligas de Villa Prades en Río Piedras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

Resuélvese por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

Sección 1.—Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de trescientos doce dólares con cuarenta centavos (\$312.40) de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 1993, para el pago de trofeos para la premiación del equipo de *Baseball* de Pequeñas Ligas de Villa Prades en Río Piedras.

Sección 2.—Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear estos fondos estatales, municipales, particulares o con aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo de los propósitos señalados en la Sección Número 1 de esta Resolución Conjunta.

Sección 3.—El Departamento de Recreación y Deportes someterá un informe a la Comisión de Hacienda del Senado sobre el uso y distribución de los fondos tan pronto se cumpla con los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.

Sección 4.—Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Aprobada en 10 de diciembre de 1993.

Oficina del Comisionado de Seguros—Asig.

(R.C. del S. 259)

[Núm. 350]

[Aprobada en 10 de diciembre de 1993]

RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar la cantidad de cien mil (100,000) dólares a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico para que realice el estudio correspondiente para viabilizar la implantación de un sistema de seguro compulsorio de responsabilidad por daños a la propiedad ocasionados en accidentes de vehículos de motor; establecer el alcance de dicho estudio y autorizar al Comisionado de Seguros a contratar los servicios profesionales y consultivos, así como de personal, para su adecuada realización; facultar al Comisionado de Seguros para requerir de entidades gubernamentales y aseguradores privados la información necesaria y pertinente al estudio encomendado; disponer el término en que se deberá concluir el estudio; y para proveer sobre la notificación y radicación del informe final con las conclusiones y recomendaciones que correspondan.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Diariamente los medios noticiosos del país reseñan los accidentes de vehículos de motor en nuestras vías públicas que causan perjuicio a las personas envueltas en los mismos, así como a la propiedad. El aumento notable en este tipo de incidente constituye un problema que afecta adversamente a nuestra ciudadanía. Hasta el presente, se han aprobado leyes reparadoras para cubrir distintas situaciones que surgen a consecuencia de estos accidentes. La Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, denominada "Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles" provee beneficios por daño corporal, enfermedad o muerte, como resultado de un accidente de vehículos de motor. De otra parte la Sección 16-102A de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, establece que en adición a la pena por infracción a la ley, el Tribunal fijará una cantidad razonable para el pago de daños que hubiere causado un conductor a la propiedad de la parte perjudicada. El pago de daños que autoriza esta Ley no incluye daños a la persona ni por sufrimien-

tos y angustias mentales. El Tribunal tampoco fijará el pago de daños en aquellos casos en que el conductor demuestre que posee un seguro de responsabilidad pública que cubre los daños causados, o que la víctima ya ha sido compensada. Sin embargo, cuando se trata de un conductor insolvente que no está asegurado, la parte perjudicada no tiene protección adecuada que permita la reparación de los daños a su propiedad. Esta situación es cada vez mas frecuente debido al gran número de accidentes que ocurren en nuestras carreteras.

Al presente, la Asamblea Legislativa tiene ante su consideración varias propuestas con la finalidad de establecer un seguro compulsorio de responsabilidad pública para vehículos de motor. En su comparecencia ante las comisiones legislativas, el Comisionado de Seguros de Puerto Rico ha señalado que dichas medidas pueden tener un efecto trascendental en el mecanismo de reparación de daños que surgen por motivo de un accidente automovilístico. Por tal razón, al evaluar los proyectos este funcionario ha indicado que para que sea viable un sistema de seguro compulsorio como el propuesto, es preciso contar con el beneficio de un estudio detallado sobre el efecto social y económico que tendría éste en nuestra economía y sociedad. El estudio recomendado también tendría que considerar la naturaleza y magnitud de la exposición de pérdidas, de suerte que se pueda determinar con bastante precisión el costo de poner dicho sistema en vigor.

Estudios como el que recomienda el Comisionado de Seguros, por ser de naturaleza extraordinaria, no están contemplados en los planes de trabajo de su Oficina, y por lo tanto, no se han considerado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de dicha entidad. Debido al interés público que reviste la adopción de un sistema de seguro compulsorio para vehículos de motor por daños a la propiedad, esta Asamblea Legislativa considera necesario proveer los recursos para que la Oficina del Comisionado de Seguros lleve a cabo el estudio recomendado.

Resuélvese por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

Sección 1.—Se asigna a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico la cantidad de cien mil (100,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que realice el estudio necesario para la implantación de un sistema de seguro compulsorio para responder por daños a la propiedad ocasionados en accidentes de vehículos de motor.

Sección 2.—Dicho estudio deberá considerar la naturaleza, magnitud y el costo para atender el problema de la falta de compensación de daños a la propiedad ocasionados en accidentes de vehículos de motor, tomando en consideración las realidades socioeconómicas de Puerto Rico. Asimismo contendrá un análisis, evaluación y presentación de posibles alternativas de seguro para atender este problema. Las alternativas que se presenten deberán considerar el costo del seguro por vehículo y su implantación a través de la industria privada de seguros.

Sección 3.—Para realizar el estudio encomendado, el Comisionado de Seguros utilizará los recursos de personal de su Oficina y podrá contratar los servicios profesionales y consultivos, así como de personal, que fueren necesarios para estos fines.

Sección 4.—Los aseguradores privados y las agencias e instrumentalidades de gobierno concernidas proveerán al Comisionado de Seguros la información necesaria y pertinente que dicho funcionario requiera para la realización del estudio y a tales efectos, el Comisionado de Seguros queda facultado con todos los poderes investigativos necesarios para obtener dicha información.

Sección 5.—El estudio para el cual se asignan los fondos mediante esta Resolución Conjunta, así como el informe con las correspondientes recomendaciones, deberá concluirse dentro del término de diez (10) meses contados a partir de la fecha de aprobación de esta Resolución. Copia de dicho Informe se remitirá al Gobernador de Puerto Rico, a los Presidentes de ambas Cámaras Legislativas y se radicará formalmente en la Secretaría del Senado de Puerto Rico y de la Cámara de Representantes.

Sección 6.—Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Aprobada en 10 de diciembre de 1993.